



PERÚ: CRECE EL MALESTAR CIUDADANO

El crecimiento del descontento y la intensidad de las reclamaciones de los sectores pobres son una constante que se ha ido incrementando en la medida que no se cumplen promesas electorales y compromisos adquiridos entre gobierno y las organizaciones sociales.

Un nuevo gabinete ministerial llamado a calmar el descontento popular mediante el diálogo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente gobierno son las claves –se ha señalado- para encontrar salidas que permitan, si no desinflar por lo menos atenuar un tiempo.

Resulta inexplicable que mientras se señala que el Perú crece, el hambre y la extrema pobreza se incrementan -ello lo entiende el ciudadano de a pie- el costo de vida sube a diario y ya resulta insuficiente intentar por lo menos estabilizar los precios. Por ejemplo subieron los combustibles por los precios del mercado internacional, sin embargo, ahora que se han reducido tres veces esos precios en lugar de bajar se siguen incrementando, incluido el reciente aumento de la energía eléctrica, el gas doméstico y el agua potable.

Y es que el modelo económico sigue en pie, en punto y coma, al impuesto por la dictadura del ex dictador fujimorista en la pasada década de los 90. Se siguen los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se consideran intocables los ítems macroeconómicos.

Los derechos laborales se encuentran en las mismas condiciones que las dejó Fujimori. Las empresas, particularmente las grandes empresas nacionales y las ligadas al capital transnacional son las beneficiarias, destacándose las de los sectores minero, pesquero, agroindustrial, textil y confecciones.

Los derechos individuales y colectivos, de huelga, de seguridad social y las pensiones a pesar de que el Perú es signatario de las principales Convenios de la OIT son letra muerta. Los salarios, la intermediación laboral, entre otros, tienen a los trabajadores en condiciones infrahumanas.

Las promesas de contar con un Estado moderno descentralizado y con una Constitución que garantice los derechos ciudadanos difícilmente se harán realidad. El descubrimiento de correos electrónicos o “petroaudios” como los conoce la población han confirmado signos de corrupción en las más altas esferas del gobierno.

En este contexto, así como se derrotó al ALCA que los norteamericanos pretendían imponer, se desarrolla una lucha frente al Tratado de Libre Comercio a la espera que el nuevo gobierno demócrata persista en realizar modificaciones sustantivas, particularmente en relación a los derechos laborales que fueran observados oportunamente.

La próxima realización de la reunión de la APEC que congregará a los representantes de gobiernos y empresas de la cuenca del Pacífico se ha constituido en la niña de los



ojos del gobierno, la derecha y desde sus estrechas perspectivas pretende convencer a la opinión pública con mentiras mediáticas que los sectores populares pretenden boicotarla, pero, sin resultados positivos.

Salvo que como anillo en el dedo le ha caído al gobierno la presencia ignorada por los diversos sectores sindicales del Secretario General de la CSI, Guy Ryder que se fue del Perú encandilado y que no ha escatimado en declarar públicamente que ha logrado **“La promesa del Presidente García de fomentar los derechos de los trabajadores en el programa del APEC”**.

Las organizaciones sociales del campo y la ciudad, desde las centrales sindicales, los frentes regionales, las comunidades campesinas e indígenas y una tupida red social vienen levantando propuestas que permitan garantizar no sólo la defensa de la democracia y las libertades individuales, sino el afirmar propuestas de igualdad social sobre la base de redistribución de la riqueza, de respeto a la dignidad y los valores humanos como la solidaridad y la justicia social.

En esa dirección acaba de concluir la Asamblea Nacional de los Pueblos organismo llamado a constituirse en un espacio amplio y plural, de profundo contenido democrático y con capacidad ciudadana para formular y aplicar políticas de Estado.

Desde el gobierno y la derecha en su conjunto se han levantado voces y discursos viscerales, de odio de clase a esta nueva organización social que –se espera– organizará y movilizará a los sectores populares.

César Alva Orihuela
Asesor CCLA-ILA